

Democracia liberal y subdesarrollo económico en Chile^(*)

Por JULIO CESAR JOBET

Los observadores extranjeros, al enfocar, con simpatía, la situación de Chile, señalan su alto grado de progreso con respecto a la mayoría de los países latinoamericanos. Ponen de relieve su relativa estabilidad política, con una extendida conciencia civil y republicana; su sólida organización institucional, afirmada en una profunda tradición jurídica; su elevado nivel de conciencia social y democrática; su sostenido avance cultural y su alto ingreso nacional por habitante. Por otra parte, destacan los esfuerzos serios por mejorar el nivel de vida de las clases laboriosas por medio de una moderna legislación social y previsional a partir de 1920, y para conseguir una industrialización amplia desde 1939, con la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), estableciendo los rubros siderúrgico, eléctrico y petrolero bajo la intervención del estado, mientras la iniciativa privada afirma los rubros metalúrgico y textil.

En el decenio de 1940-50 se aprecia un importante avance en el campo industrial: la "fuerza de trabajo empleada en la industria fabril crece... desde las 60.000 personas que ocupaba en 1920 hasta las 204.000 que emplea en 1952", y en el período de 1940-45 la industria generaba el 15.4% del producto bruto, aumentando a un 19.6% en el año 1956.

Aunque esos observadores comprueban que en su base el país es atrasado y dependiente, subdesarrollado por la fuerte penetración imperialista en la minería y servicios de utilidad pública, y por su sistema agrario semifeudal, subrayan al mismo tiempo cómo Chile está dejando de ser una nación dependiente típica, pues sus caracteres de tal se modifican en aspectos esenciales: su industrialización es apreciable; su economía no reposa en lo interno, en la agricultura, sino en la industria; el volumen de su producción exportable es menor con relación a la producción total; la intervención del estado para crear un desenvolvimiento orgánico de la estructura productiva, como condición previa para un grado de independencia económica, es más importante que la iniciativa privada; su desarrollo de las fuerzas productivas, a través de la industrialización, ha estado aparejado con un mejoramiento de las condiciones de la vida de las masas, a través de numerosas leyes sociales y previ-

sionales, y en lo social se ha formado un vigoroso proletariado industrial en minas, ciudades y sectores medios con niveles de vida de bastante categoría.

Chile ha conquistado un progreso indudable en muchos aspectos materiales y posee una alta conciencia política; pero, no obstante, su estructura económica básica es primitiva. De ahí derivan sus características de país subdesarrollado, semifeudal y semicolonial. En él existe un entrelazamiento de formas económicas irreconciliables y de tendencias sociales contrapuestas, surgidas del semifeudalismo agrario, de la penetración imperialista, del incipiente capitalismo nativo, del burocratismo estatal y del movimiento obrero, dentro de un régimen orientado por fórmulas políticas liberales, todo lo cual crea un precario e inestable equilibrio de clases, una indefinición económica, atraso, inflación descontrolada y anarquía política.

La solución de sus hondos problemas y de sus numerosas contradicciones sólo es posible rompiendo y eliminando tan heteróclita realidad según las líneas de una completa reestructura económico-social científicamente planeada.

(*) Ensayo publicado en la revista venezolana POLITICA.

EL FRACASO DE LA "REVOLUCION PACIFICA"

La desacertada gestión económica y política de los gobiernos de postguerra produjo un general descontento en las grandes masas laboriosas y, a la vez, un abierto repudio a los partidos políticos a causa de su incapacidad para interpretar las aspiraciones de mejoramiento y bienestar y por su total esterilidad realizadora. En este ambiente de descontento y confusión se llevó a cabo la elección presidencial de septiembre de 1952. En ella logró una victoria impresionante el anciano y versátil político "independiente" don Carlos Ibáñez del Campo, en brazos de un esperanzado movimiento populista cuyos lemas más resalantes radicaron en una fuerte afirmación creadora y nacionalista (rehacer la colectividad chilena con plena soberanía por medio de una economía moderna, de una política dinámica y de una elevada moralidad) y en su denuncia patriótica de la politiquería frívola y corrompida, en medio de la cual los partidos y sus dirigentes representaban el papel de meros instrumentos de la demagogia y de la desmoralización. El triunfo electoral de septiembre de 1952 se presentó ante el país como una ineludible "revolución pacífica". Desgraciadamente, el nuevo gobierno se demostró, desde su primer día, vacilante y contradictorio, provocando rápidamente un doloroso desaliento aun entre sus partidarios más decididos. A pesar de sus vigorosas declaraciones nacionalistas, favoreció en forma generosa a las grandes empresas capitalistas extranjeras y mantuvo tolerancias equívocas

con dictaduras vecinas. Las compañías explotadoras del cobre lograron la aprobación de una ley de "nuevo trato", concediéndoles extraordinarias garantías a sus capitales y a sus utilidades, a costa de los intereses del país; y la industria salitrera recibió en la misma forma un tratamiento asaz favorable. En cambio, la esperanza de una política agraria de reforma y fomento, orientada a cubrir el tremendo déficit alimentario del país, anhelada por la gran mayoría ciudadana, se frustró de manera vergonzosa. Se permitió la continuación de los métodos primitivos de cultivo, el no aprovechamiento de gran parte de la superficie agrícola, el atraso y la rutina. La industrialización prosiguió con el mismo criterio de las anteriores administraciones, sin plan ni orientación, sujeta al egoísmo y al desmesurado afán de lucro de los intereses particulares, y por parte del sector estatal, en forma burocrática y vacilante.

A consecuencia de la inoperancia del gobierno, del caos político y de la especulación desenfrenada de la oligarquía dueña del capital, se desataron violentos movimientos sociales de protesta (huelgas nacionales de 1954, enero de 1956 y movimiento del 2 de abril de 1957). El gobierno, incapaz de contener la inflación desorbitada, contrató una misión de expertos norteamericanos, encabezada por los financieros Klein-Saks, con el propósito de ordenar y sanear el proceso económico nacional. En esa forma, el gobierno se subordinó abiertamente a la política imperialista norteamericana.

En vez de mejorar la situación del país, se agravó por la presión violenta del capitalismo yanqui, preocupado en imponer una línea económica de tipo liberal en defensa de sus grandes monopolios imperialistas, y de las empresas nacionales aliadas, a costa de las masas populares. La misión Klein-Saks fue la encargada de uniformar aquella política, y durante el tiempo de su actividad consumió elevadas rentas. En el último año de su permanencia, desde julio de 1957 a junio de 1958, recibió por sus servicios la suma de 324.000 dólares, más de trescientos millones de pesos. Al mismo tiempo que su coerción económica, EE. UU. nos impuso una política militar de defensa hemisférica que, a través de pactos bilaterales, nos obliga a la adquisición de armamentos y a la habilitación de grandes efectivos militares. Según el proyecto de Ley de Presupuesto para 1958, la Defensa Nacional consumía el 23%, mientras Educación absorbía el 15% y Salud Pública el 8.6%. Y en esos mismos instantes 370.000 niños en edad escolar permanecían al margen de toda atención y 730.000 chilenos mayores de catorce años eran analfabetos por falta de escuelas y recursos adecuados. Por otra parte, de diversas regiones del país llegaban noticias de numerosas muertes por epidemias y carencia de atención médica y sanitaria.

De acuerdo con los estudios muy serios y objetivos de la CEPAL, Chile ha ido quedando postergado en la competencia por industrializarse y desarrollarse, y así lo establece también el economista Alberto Baltra en su excelente libro de reciente publicación **Crecimiento económico de América Latina**, en uno de cuyos párrafos anota: "El proceso de crecimiento de la economía chilena se lesiona se-

riamente a partir de 1953. Desde este año, el producto bruto deja de crecer. Como lo reconoce la CEPAL, "se detiene" el desarrollo de la economía chilena. Esta es la consecuencia de tendencias a largo plazo que influyen sobre el crecimiento de la economía de Chile; pero, además, fruto de los múltiples y reiterados desacuerdos y errores económicos y financieros cometidos desde 1953 en adelante y que en 1955 culminaron con la puesta en práctica de una política llamada antiinflacionista, fundamentalmente inadecuada, socialmente dañina e intrínsecamente reaccionaria, que reduce sin piedad el nivel de vida de la clase trabajadora y provoca una fuerte contracción artificial de las actividades productivas."

ASPECTOS Y CIFRAS DEL ATRASO DE CHILE

Examinando a fondo el desenvolvimiento nacional, en los últimos años se comprueba una estagnación seria en el desarrollo de las fuerzas productivas, traducida en la disminución del ritmo de aumento de la producción y en la débil capitalización neta anual, inferior a un 5% del total del ingreso nacional. El 90% de los ingresos se gasta y consume, un 5% se destina a reponer el desgaste del capital y sólo un 5% representa la capitalización neta. Los países adelantados de Europa dedican hasta el 40% de sus ingresos a fines de capitalización (por ejemplo, Yugoslavia, el 28%; Holanda, el 40%). En Chile, 300.000 personas poseen el 52% de la renta nacional; 2.000.000 tienen el 28%, y 600.000, el 20%. Según el ingeniero Helio Varela en un estudio reciente (**Distribución del ingreso nacional en Chile a través de las diversas clases sociales**), 280.000 personas, patronos y propietarios —el 9% de la población activa— reciben el 43% del ingreso nacional, mientras que 2.700.000 obreros y empleados —el 91% de la población activa— reciben el 57%. La minoría privilegiada despilfarrá sus inmensos ingresos en vez de ahorrar; tradicionalmente derrochadora, ha constituido el obstáculo más serio para cualquier mejoramiento económico del país, pues consume recursos que debieran emplearse en el incremento material y en el aumento del bienestar colectivo. A juicio de diversos economistas, si los patronos y empresarios doblaran su propensión a ahorrar, el coeficiente del ahorro total se elevaría al 16% del ingreso, o sea, aumentaría en un 60% con respecto a la tasa actual. Alberto Baltra expresa: "Bastaría que las clases con altos ingresos incurrieran en moderados sacrificios de sus consumos excesivos para que la economía chilena mejorara sustancialmente la inversión y, por lo tanto, apresurase el ritmo de su crecimiento sin sacrificar los consumos, ya exigüos, de las clases con ingresos bajos y medianos." Su opinión es la del economista británico Nicholas Kaldor, profesor de Cambridge, quien en 1956, a petición de la CEPAL, visitó Chile y redactó un profundo análisis de su realidad (**Problemas económicos de Chile**). Según Kaldor, el consumo suntuario de la clase propietaria chilena absorbe una parte desproporcionada de los recursos nacionales y, mediante su reducción, en Chile la tasa de capitalización se podría elevar a niveles compara-

bles a los exhibidos por las economías industriales avanzadas, y nota cómo, si dedicara al consumo el mismo porcentaje destinado por la clase patronal empresaria de Inglaterra, el coeficiente chileno de inversión aumentaría en más del doble, y concluye Kaldor: "Las estimaciones anteriores vienen a contradecir, por lo tanto, el socorrido argumento de que es imposible financiar una tasa más acelerada de capitalización real en Chile sin contar con una gran ayuda económica del extranjero. De acuerdo con las estimaciones del ingreso nacional, sería posible doblar la tasa de inversión bruta en por ciento del producto nacional sin rebajar el nivel de las masas."

A raíz de lo señalado, ni siquiera se pueden mantener en su estado actual los servicios públicos, las vías de comunicación y los transportes, y tampoco cerrar el déficit habitacional. Su agricultura desciende en forma continua; su expansión industrial es lenta y muchas de sus industrias constituyen una carga dolorosa para la población; su producción minera sufre oscilaciones temibles y en el cobre experimenta los trastornos propios de estar en manos de un monopolio internacional (la armazón financiera del país descansa en las ventas del cobre), y, envolviéndolo todo, una inflación pavorosa, agravadora del lamentable proceso nacional. La industria de la construcción se encuentra casi paralizada, y la industria de la madera, semiparalizada; sin embargo, en el país faltan 400.000 viviendas. Algunas contradicciones indignan: los trabajadores visten harapos y los sectores medios deben

realizar milagros para adquirir un traje; mientras tanto las bodegas de las fábricas de paños están abarrotadas de géneros. Se importa trigo y, no obstante, la CEPAL ha dicho que en las provincias de Santiago y Valparaíso se cultiva únicamente el 29% de las tierras regadas. Si se cultivara el saldo habría una mayor producción de cerca de un millón de quintales de trigo. En conferencia reciente en la Universidad de Chile, un experto dio datos al respecto, y, según ellos, 400.000 hectáreas regadas no se aprovechan. En los últimos años las masas asalariadas perdieron el 31.8% del valor adquisitivo de sus salarios y sueldos. Y este fenómeno ha continuado ahondándose. Aparte de las muy precarias condiciones de trabajo de vastas masas laboriosas, en la actualidad existe una cifra de 200 mil cesantes.

La propiedad agraria está concentrada en unas pocas manos (los grupos de 1.000 a 5.000 hectáreas y mayores de 5.000 hectáreas suman 2.700 explotaciones, el 2.8% del total, y concentran el 41.2 por ciento de la superficie arable del país), lo que se traduce en un aprovechamiento parcial del suelo, mientras, por otro lado, existen miles de pequeñas explotaciones incapaces de ayudar a una subsistencia tolerable del campesino. Entre 1946 y 1955, las importaciones de productos agropecuarios que el país está en condiciones de producir en forma eficiente y con altos rendimientos (trigo, oleaginosas y carne), crecieron de 60 millones a 120 millones de dólares, y las exportaciones bajaron de 48 millones a 38.5 millones de dólares. De esta

suerte, la agricultura nacional, en vez de ayudar al fortalecimiento económico, le resta una alta proporción de divisas a la importación de bienes de capital, combustibles y materias primas indispensables para la expansión de la economía "interna", y día a día ahonda el problema alimenticio, pues la natalidad se mantiene alta (39 por mil), mientras la mortalidad ha disminuido a 9 por mil, o sea, anualmente se agregan a cada mil bocas otras treinta.

Un tercio de las personas que en Chile perciben ingresos monetarios lo hacen en la actividad agrícola, y como éstos son bajísimos, la demanda interna no es capaz de desempeñar un papel dinámico para el desarrollo de los demás sectores económicos. Los grandes propietarios del suelo alegan en defensa de sus privilegios que el descenso de la producción agraria se debe al escaso suelo agrícola del país. Es sólo una verdad a medias. El territorio agrícola abarca 186.000 kilómetros cuadrados, y el forestal, 79.000 kilómetros cuadrados; un total de 265.000 kilómetros cuadrados. De ese total todavía existen grandes porciones sin roturar, y otras están insuficientemente cultivadas o sometidas a destrucción por la incuria de los poseedores. Según el ingeniero agrónomo Gustavo Schmidt G. (en artículos publicados en **El Mercurio**), existen todavía 11.3 millones de hectáreas inactivas (1.4 millones de hectáreas regadas por iniciativa privada y de la Dirección de Riego y por nuevos reconocimientos y proyectos; 1.3 millones de hectáreas del área pantanosa; 400.000 hectáreas de las cajas de los ríos, después de fijar sus cauces; 1.1 millones de hectáreas de terrenos indígenas; 850.000 hectáreas de arenas para forestar; 6.5 millones de hectáreas por destronar, despalar y desmontar en Cautín, Valdivia, Chiloé, Aisén y Magallanes). En resumen, las posibilidades agrarias del país son todavía inmensas, pero serán realidades en la medida en que el gobierno prepare e impulse un plan agrario moderno, realista y audaz.

En la minería ocurre algo similar, desfavorable para la economía nacional. Los valores no retornados de la gran minería del cobre han tenido una escala ascendente desde el año 1944 hasta 1955 (en este año fueron 83 millones de dólares no retornados), con un promedio de 42 millones de dólares. Según cifras proporcionadas por el Departamento del Cobre, en 1956, la producción de cobre fue de 443.000 toneladas métricas, a un precio de 40,3 centavos de dólar la libra. El valor de lo vendido alcanzó a 341.9 millones de dólares: 207.1 millones correspondientes a valores retornados, 26.3 a internación con cambios propios y 108.4 millones a valores no retornados. En estos últimos años ha decaído en forma sorprendente la tributación del cobre. En 1955 alcanzó a 163 millones de dólares, en 1956 bajó a 131 millones, en 1957 a 74 millones y en 1958 a 52 millones de dólares.

En el rubro salitre ocurre una situación parecida. El valor de las ventas de salitre y yodo (1.400.000 toneladas de salitre y 800.000 kilogramos de yodo) alcanzó a 57 millones de dólares: valores retornados, 37.9 millones (costo de producción, 36.1; participación fiscal, 1.8); valores no retornados, 9.8 millones (amortización y deudas, 1.2; in-

tereses de deudas, 0.7; amortización de capital, 3.5; utilidades, 4.4).

La deuda externa constituye otra sangría económica del país. De acuerdo con una publicación de la Caja de Amortización, Chile debía, en 1937, 344 millones de dólares en 1957, 161.700.000. En veinte años se amortizaron 182.300.000 dólares y se pagaron en intereses 84.950.000 dólares.

Desde 1870 a 1930 la moneda ha descendido en su valor de 45 a 6 peniques. En 1930 el dólar valía 8 pesos; en 1958, más de 1.000 pesos. El alza de los precios al por mayor experimenta este crecimiento; si se coloca como índice 100 en 1930, en 1956 es de 9.411 y en 1957, de 15.602. El alza del costo de la vida presenta este ritmo: si en 1930 se coloca un índice 100, en 1956 es de 10.832 y en 1957, de 16.002.

La inflación en Chile ha sido aguda y persistente y se origina en la anticuada estructura económica. Ninguna de las administraciones últimas se ha atrevido a modificarla con el objeto de remediar los males imperantes. La inflación ha agravado la situación de Chile: ha determinado el estancamiento del proceso económico-social, la anarquía política y el desquiciamiento espiritual del país; la desvalorización de la moneda impide la formación de capitales, pues esfuma los ahorros, desalienta las inversiones, dificulta la reposición del capital social e industrial, obstaculiza la exportación debido a los crecientes costos internos, favorece la intensificación de la explotación de los grandes consorcios internacionales, esteriliza el mejoramiento de los salarios y sueldos burlando los reajustes; acentúa el desconcierto político y estimula el clima de irresponsabilidad, agio y deshonestidad. Son innumerables los ciudadanos que viven de las diferencias de precios, del mayor valor de los bienes, de las franquicias cambiarias, de beneficios previsionales, de expedientes crediticios, de operaciones en la bolsa, de negocios rápidos y oscuros, del contrabando elevado ya a una costumbre "normal", aceptada y practicada en todos los sectores sociales.

LAS CONTRADICCIONES BASICAS DE CHILE

A consecuencia de lo expresado se ha producido la detención del proceso de mejoramiento real de las condiciones de vida del pueblo. Diversos sectores obreros, las capas campesinas, secciones de la burocracia, profesionales y técnicos viven en situación angustiosa. Sus escasos aumentos de sueldos y jornales no compensan las tremendas alzas ocasionadas por la inflación. En general, la capacidad adquisitiva de las clases populares ha descendido por la subida de los precios y la desvalorización de la moneda.

En lo político se observa una anarquía grande. Desde hace varios años se advierte una ausencia de autoridad propia de un gobierno firme y justo, bien orientado, que ponga término a la rotativa ministerial, a los apetitos espurios de partidos artificiales, al desorden en la administración pública e imprima rumbos definidos y dinámicos

al conjunto de la comunidad. El desgobierno y la crisis de la autoridad pública, la irresponsabilidad gubernativa se corresponden con la anarquía de las fuerzas políticas. Innumerables agrupaciones políticas, sin doctrinas ni programas, movidas por exclusivos apetitos y oportunismos, tratan de incorporarse al Estado para gozar de las ventajas de la política a base de un asqueroso personalismo y de las más bastardas ambiciones. Las mayorías nacionales se restan entonces a la acción política al confundirla con la deprimente politiquería de sincuras y chanchullos, y repudian a los partidos por su esterilidad y sus contubernios intrascendentes. Se produce en la opinión ciudadana mayoritaria un evidente cansancio, desinterés y escepticismo por la acción de los partidos, grupos e individuos de la política profesional y un repudio al desgobierno, al favoritismo y a la deslealtad a los programas de los grandes caudillos. Este estado de ánimo derrotista y de desilusión se traduce en un peligroso hastio hacia la estructura republicana y las formas democráticas de gobierno.

En lo espiritual y moral predomina un individualismo egoísta y despiadado, un dominante afán de lucro y especulación, tras ganancias fáciles o enormes; un cinico desdén por el honor y la honestidad. Todos tratan de engañar al prójimo; de trepar sobre sus espaldas, de vivir sin trabajar, por medio de engaños, desfalcos, negociados y robos.

En resumen, en Chile, la presencia de rezagos feudales (latifundio) en lo agrario origina y sostiene una oligarquía terrateniente y causa

el descenso de la agricultura; la penetración imperialista explica la dependencia económica y el empobrecimiento del país en su conjunto; el incipiente capitalismo criollo acusa un elemental desarrollo industrial; la existencia de una frondosa legislación social y previsional, ineficaz en muchos aspectos por falta de recursos, y el poderoso movimiento sindical, traducen la presencia y el peso social y político del proletariado; el predominio de la ideología democrático-burguesa refleja el crecimiento de las clases medias y su influencia preponderante en la conducción del país. Y, en general, se comprueba la vigencia en lo económico, social y político, del sistema de incentivos propio del capitalismo y del demoliberalismo.

Esta realidad heteróclita, contradictoria e inestable, provoca la pobreza, la inflación, la cesantía, la especulación y el peso muerto de una agobiadora burocracia y de otros sectores parasitarios y derrochadores. O sea, Chile, no obstante su progreso en muchos aspectos y su alta politización, es un país básicamente primitivo. Es semi-feudal y semicolonial y en ello reside el origen, la raíz, de su difícil situación.

CARACTER DE LAS ELECCIONES DE 1958

La elección de septiembre de 1958 se verificó en medio del panorama reseñado. Aunque se presentaron cinco candidaturas, sólo dos expresaron en forma definida la pugna económico-social de fondo. Fueron las de Jorge Alessandri R., ingeniero, senador de la provincia de Santiago y gerente del mo-

nopolio papelerero del país, dirigente máximo en diversos periodos de la Confederación de la Industria y el Comercio y ex Ministro de Hacienda de don Gabriel González Videla, y la de Salvador Allende G., médico, senador de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, y ex Ministro de Salubridad del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. La lucha se dio en circunstancias democráticas a causa de un vuelco político a fines de la administración de Carlos Ibáñez del Campo. Hizo derogar la Ley de Defensa de la Democracia reemplazándola por una ley de seguridad interior y, en consecuencia, le devolvió la ciudadanía a los comunistas; reformó la ley electoral estableciendo la inscripción permanente, el voto obligatorio, la cédula proporcionada por el Estado y diversas otras disposiciones encaminadas a purificar el acto electoral, poniéndose término al cohecho y demás presiones.

En las elecciones del 4 de septiembre de 1958 triunfó Jorge Alessandri, candidato de las derechas tradicionales, con 390.000 votos (31% del electorado); le siguió Salvador Allende, candidato socialista de las fuerzas populares, con 356.000 sufragios (28,5%); en seguida Eduardo Frei, candidato demócratacristiano, con 255.000 votos (20%); Luis Bossay, candidato del Partido Radical, con 192.000 votos (15%), y en último término, Antonio Zamorano, candidato independiente (ex cura de Catapilco), con 15.000 sufragios (1,5%).

El triunfo de Jorge Alessandri R., se debió al apoyo entusiasta de los partidos de extrema derecha (conservadores y liberales y de algunos pequeños grupos sueltos), cauce político de los intereses de los poderosos sectores de terratenientes, alto comercio, banca, industria monopolista y alta burocracia, respaldados por los cuantiosos vínculos de la penetración imperialista. Sin embargo, el candidato victorioso se presentó siempre como independiente. En verdad, tuvo la adhesión de algunos contingentes de los diversos estratos sociales ajenos a las agrupaciones políticas, pero éstos en ningún instante inspiraron y orientaron su campaña. Su postulación y su victoria fueron el resultado de una poderosa movilización financiera, social, política y demagógica, de las clases poseedoras del capital, a través de las agrupaciones mencionadas, y por la hábil explotación del desprestigio de la administración del General Ibáñez, quien triunfó en brazos de una formidable marea popular, pero a la cual engañó y burló.

El estrecho triunfo de Jorge Alessandri fue confirmado en el Congreso. Organizó su gobierno con personeros independientes, en su mayoría ingenieros-gerentes ligados a las grandes empresas capitalistas, de mentalidad "técnica", conservadora-liberal, defensores de la libre empresa, de la iniciativa privada en vez de la intervención estatal, de la austeridad a costa del sacrificio de las masas trabajadoras y de un apoyo generoso al capital extranjero.

El nuevo gobierno de los "gerentes", representación política de los intereses del gran capital, no logrará sacar al país de su profunda crisis estructural. A lo más podrá desarrollar limitadas fuerzas productoras con criterio ca-

pitalista, lograr ciertas ordenaciones administrativas y, tal vez, algún alivio momentáneo por las poderosas inyecciones del capitalismo imperialista. O sea, alejar transitoriamente el estallido de las fuertes tensiones y pugnas.

ENDEUDAMIENTO Y SUMISION AL GRAN CAPITAL EXTRANJERO

En su primer año de gestión ha demostrado, en general, una idéntica orientación a la del gobierno de Ibáñez. Sólo es más pronunciada su tendencia al reforzamiento de la estructura monopolista de la industria nacional y más intenso el sometimiento al imperialismo. En lo agrario no ha intentado nada. Todo se reduce a conseguir el máximo otorgamiento de préstamos por parte de los EE. UU. con el propósito de paliar los déficits de la balanza de pagos como del presupuesto fiscal y dar el mayor estímulo a la inversión de capitales foráneos en la minería, industria y comercio del país. Esas medidas a largo plazo y la reducción de los gastos fiscales, la eliminación de empleados y la mantención de las remuneraciones a niveles mínimos, sin nuevos reajustes, son consideradas fundamentales para terminar con la crisis, la cesantía de 200.000 obreros, el reanimamiento de algunas industrias semiparalizadas y el incremento general de la economía nacional.

La nota predominante en el nuevo gobierno es su preocupación por el "problema económico", pretendiendo el desarrollo del país dentro de los más estrictos moldes capitalistas, en estrecha colaboración (o más bien sumisión) con las finanzas internacionales. Su lema de estímulo a la empresa privada, aunque frena la expansión del sector de empresas estatales, no se opone del todo. La burguesía acepta que el Estado intervenga en la formación de empresas básicas que por su magnitud y, al mismo tiempo, escasa rentabilidad están fuera de la iniciativa privada. El capital privado se reserva el sector de la industria de transformación, donde las inversiones son menores y el lucro es mayor e inmediato. Por otra parte, las grandes empresas básicas son financiadas con capital extranjero, préstamos y por medio de impuestos indirectos. Una vez éstas en uso, crean condiciones indispensables para el desenvolvimiento manufacturero, sector dominado por la iniciativa privada en su exclusivo provecho y, a veces, las empresas ya montadas por el esfuerzo estatal, tratan de ser dominadas por los consorcios privados. Precisamente el nuevo Vicepresidente de la CORFO, elemento representativo del equipo de gerentes de Alessandri, señor Pierre Lehmann, anunció en una larga exposición el propósito del Ejecutivo de sacar a remate las empresas e industrias de propiedad de la CORFO o enajenar su participación en las mismas con el objeto de favorecer los intereses particulares. En el fondo se propone desmantelar la CORFO, órgano de la economía estatal, y transformarla en sirviente de los intereses privados. Este organismo es una creación de las fuerzas democráticas y promovió la organización de empresas públicas y semipúblicas para desarrollar grandes industrias en función de los intereses nacionales. Así nacieron

la ENDESA (energía eléctrica), la ENAP (petróleo), la CAP (acero), con éxito sorprendente. El gobierno de Alessandri trata ahora de liquidar una empresa en estado de realización (la industria azucarera, a base de remolacha); encarpeta dos proyectos estudiados y en condiciones de realizarse (industria petrocarboquímica e industria de celulosa) y abandona tres proyectos en estudio (industria de carbones livianos de Pupunahue, en la provincia de Valdivia; industria de cenizas de soda, en la provincia de Tarapacá, y proyecto Corfiat, en Rancagua). Este detenimiento del desarrollo industrial por la CORFO se debe exclusivamente a la presión de los intereses monopolistas.

El capital extranjero posee ya grandes inversiones en el país, domina las actividades de la gran minería y extiende su participación en las diversas industrias y casas comerciales. El capital nacional se encuentra asociado al capital extranjero en un número cada vez mayor de ramos, como Insa, Corporación de Radio, Rayonhil, Inchalam, Cristalerías Chile, Chiprodal, Tejidos Caupolicán, Electromat, etc., y en el sector comercial en firmas como Wessel Duval, Gibbs y Cia., Ford Motor, Coca-Cola, Williamson Balfour, Cia. Imperial de Industrias Químicas, Cia. Chilena de Tabacos, Bayer, Merck, Philco, Société Française de Sucreries au Chili, A.S.E.A., Ericsson, etc.

Según un estudio de Carlos Keller, tomando como base informes del Banco Central y publicado en "El Mercurio", del 11 de marzo de 1957, las inversiones y créditos extranjeros en dólares, en Chile, eran:

	1948	1953
Deuda externa y garantías del Estado	141.9	227.1
Agricultura	6.9	4.1
Minería	383.0	524.1
Industria	35.0	47.8
Comercio	34.9	36.7
Bancos y Seguros	6.6	7.0
Electricidad, ferrocarriles, teléfonos y telegrafos	99.7	72.9
Otras	85.3	100.8
	793.3	1.020.5

En 1953, la deuda externa y garantías del Estado tenía la siguiente composición: deuda directa del Estado, 67,0; CORFO, 105,1; Ferrocarriles del Estado, 22,8; Lan, 4,5; Inaco, 0,5; Fondo de Estabilización, 25,0; y convenios de compensación, 2,2 millones de dólares. Por países el detalle era éste:

	1946	1953
Estados Unidos ..	536.0	813.1
Gran Bretaña ...	198.4	127.7
Banco Internacional	8.8	22.1
Suiza	5.0	9.8
Francia	4.8	9.6
Argentina	29.9	6.7
Alemania	0.2	5.0
Bélgica	2.2	4.8
Suecia	0.9	2.9
Uruguay	—	2.8
Japón	—	2.7
Otros países	7.1	13.3

En un estudio del periodista Rubén Corvalán, aparecido en "La Nación", en el quinquenio de 1960-64 las nuevas inversiones deberán elevarse de 700 millones a 1.000 millones de dólares. El Comité de Inversiones ha autorizado nuevos ingresos de capital extranjero al país por un total de 62 millones de dólares, pero hasta el mo-

mento se han incorporado en forma efectiva a las actividades productoras nacionales únicamente 22 millones. De acuerdo con el nuevo estatuto jurídico aprobado para la gran minería del cobre, entre los años 1955 a 1958 las compañías cupríferas han solicitado autorización gubernamental para invertir 159.309.540 dólares y han hecho efectivo 143 millones, quedando por invertir el saldo. Recién se inauguró la explotación de la nueva mina "El Salvador", con una producción anual de 100.000 toneladas métricas y reservas para medio siglo. Las inversiones iniciales suman más de 100 millones de dólares. La Compañía de Teléfonos de Chile está desarrollando un plan de expansión con una inversión de 30 millones de dólares. La Anglo Lautaro Nitrate Co. está colocando en sus oficinas salitreras y en la mecanización del puerto de Tocopilla, 30 millones de dólares y tiene en proyecto un nuevo plan por otros 7.500.000 dólares y una inversión adicional para un futuro más lejano de otros 15.000.000 de dólares. En cuanto a las inversiones futuras señaladas por el Ministro de Hacienda para los próximos cinco años se consideran 300 millones de dólares en la expansión de las faenas cupríferas, 75 millones en la siderúrgica de Huachipato; otros millones en la minería del hierro, desarrollo de la energía eléctrica y la industria del papel y la celulosa y una serie de inversiones menores en diversas industrias nacionales ya establecidas. Por otro lado, en los últimos diez años, el país ha recibido créditos del Eximbank por 270 millones de dólares y el Banco Mundial le ha facilitado otros 74.100.000 dólares. Los nuevos empréstitos contratados por el gobierno llegan a 272.000.000 de dólares. El endeudamiento del país es tan grave que compromete el porvenir de las futuras generaciones. En una intervención reciente, el senador Raúl Ampuero exhibió la situación siguiente: para atender el servicio de los 272 millones obtenidos últimamente se deberán cancelar en 1960, 1961 y 1962 alrededor de 47 millones de dólares cada año y en 1963, más o menos 60 millones. Para atender el servicio de los antiguos créditos, los cuales alcanzan a 680 millones de dólares, en 1960 se pagarán 81 millones; en 1961, 63 millones; en 1962, 39 millones, y en 1963, 38 millones. Es decir, por el servicio total de las deudas contraídas por los sectores público y privado en el extranjero, sin tomar en cuenta ni una sola operación adicional de crédito en los años venideros, el país pagará en 1960, 128 millones; en 1961, 110 millones; en 1962, 86 millones, y en 1963, 98 millones de dólares.

Las estadísticas reproducidas señalan con claridad meridiana la subordinación completa de la economía nacional al capital extranjero y el endeudamiento sistemático del país. Si en verdad esta inyección de capitales foráneos puede asegurar un cierto desarrollo a su crecimiento industrial, sus perspectivas son limitadas y no suponen eliminar su atraso básico. A su sombra, las clases tradicionales impiden reformas urgentes en el sector agrario, imprimen un aspecto burocrático al sector estatal y se reparten con la alta burocracia los beneficios de la economía, en detrimento de la población laboriosa. Mantiene bajos salarios y a través del proceso inflacionista sustraen

de la población los recursos necesarios para la ampliación de sus empresas. Los monopolios provocan una especulación sin medida aumentando los precios a su arbitrio, mientras el gobierno en confusas y enredadas explicaciones oculta sus privilegios y sus ganancias desorbitadas y cae en la frivolidad de adiestrar al consumidor en la petición de rebajas de un 10 o 20%, como manera de contrarrestar los abusos de industriales y comerciantes, quienes elevaron los precios en un cien por ciento.

A la actitud económica del gobierno de Jorge Alessandri le quedan muy justas estas observaciones del economista Alberto Baltra, en su libro ya citado: "El problema fundamental de la economía chilena no puede plantearse en términos estrictamente económicos. Este es un criterio estrecho y corto. Más que nada es, seguramente, un criterio interesado. El problema básico que afecta a Chile se relaciona indisolublemente con la estructura social, cultural e institucional del país. Es verdad que los cambios en la estructura, por lo común, envuelven penosos sacrificios para las personas cuyos intereses están ligados a las instituciones en vigencia, pero el sacrificio de las minorías privilegiadas es el precio histórico que siempre han debido pagar los pueblos para abrirse camino hacia el progreso que buscan y conceder a las grandes masas populares el bienestar que exigen... Las sociedades no pueden crecer dentro de las viejas estructuras. Desde este punto de vista, el desarrollo económico es un proceso genuinamente revolucionario. No puede haber avance sin que cambien fundamentalmente la posesión del mando político y la distribución del ingreso nacional. Los que, apegados a sus conveniencias y enceguecidos por la pasión lucrativa se aferran al actual orden negándose a oír las exigencias del progreso, sólo conseguirán con su conducta insensata añadir la violencia a la reforma. Es la lección de la Historia. Creemos que el problema esencial de Chile es, en mayor o menor grado, problema común de América Latina".

EL DRAMA DE CHILE

El panorama nacional es muy sombrío: la producción agraria sigue estancada; los monopolios dominan a su antojo; los beneficios del abusivo régimen imperante se distribuyen entre los miembros insaciables de una minoría privilegiada, compuesta por las familias tradicionales y advenedizas, especuladores afortunados, ávidos y derrochadores. En cambio, los trabajadores, campesinos, empleados y técnicos, sufren angustias intolerables; viven una existencia cada vez más insegura y miserable. De ahí su emigración constante a otros países, en busca de un porvenir menos incierto.

En Chile coexiste la riqueza ostentosa e insolente de una minoría con la miseria más degradante de la gran mayoría; las formas jurídicas más adelantadas se entrelazan con las prácticas de los vicios más infamantes; los últimos adelantos de la técnica en refrigeradores, radios y automóviles se sobreponen a una realidad económico-so-

cial primitiva y atrasada. La más despiadada injusticia y un sórdido ambiente de corrupción se enseñorean de nuestra sociedad. Los privilegios desmesurados, los beneficios exorbitantes y el espíritu de lucro de una minoría irreductible mantienen al país en su atraso y aumentan el empobrecimiento del pueblo. La alianza estrecha de esa minoría, u oligarquía, con el imperialismo, impide la liquidación de las instituciones tradicionales de explotación y dependencia; de los privilegios agobiadores, y se opone a un desarrollo económico progresivo, armónico y autónomo, con una planificación adecuada, una intervención técnica reguladora del Estado, una industrialización efectiva en beneficio del bienestar del pueblo; un comercio exterior diversificado, una reforma agraria prudente y fecunda; una cultura extendida a las masas y un real mejoramiento de las condiciones de vida de las clases laboriosas. Para terminar, y a manera de resumen, el proceso actual, aunque asegure cierto incremento a la economía del país, no verificará la reforma agraria, no mejorará las formas de vida de las clases medias y populares y no consolidará las instituciones democráticas. Creará únicamente una más estrecha alianza entre el capital nacional y el extranjero y la alta burocracia del sector estatal de la economía, interesados ambos en mantener el grado actual de explotación de las clases productivas. Inflación, desocupación, inseguridad, persecuciones en la administración pública, contraste irritante entre los privilegios de unos pocos y la angustia o la miseria de los más, desilusión, fatalis-

mo derrotista e indiferencia negativa, serán los aspectos predominantes de la realidad nacional.

El régimen económico social de Chile ha llegado a un punto crítico de su evolución, porque ya no es posible expandir la economía, desarrollarla cuantitativa y cualitativamente, en términos apreciables; lograr un progreso hondo y acelerado de las fuerzas productivas, sin cambiar de manera pro-

funda sus bases estructurales. Esto es una tarea revolucionaria, pues significa despojar del poder político a las clases dominantes y reemplazarlas por otras, actualmente subyugadas, pero capaces de colocar al país sobre cimientos nuevos y de inaugurar una fase de transformaciones radicales, por medio de una planificación integral de la vida nacional. Esta planificación exige la eliminación del régimen capitalista y burgués, por cuanto el sistema económico capitalista y el individualismo burgués son incompatibles con el establecimiento de una planificación económica, con criterio social, hacia fines de beneficio colectivo. Sólo un gobierno de trabajadores manuales e intelectuales, de profesionales y técnicos, puede liquidar el marasmo nacional y desatar las inmensas fuerzas creadoras contenidas en el pueblo, dando una nueva perspectiva a la nación.

Una filosofía auténticamente socialista enfoca el problema de la democracia como un problema total: el de la vida política; el de la ordenación económica basada en la cooperación y el tratamiento racional de las cosas y las personas; el de la organización del Estado; el del sistema de representación; el de la voluntad y la conciencia públicas; el del régimen y amplitud de las libertades; el de la administración de la propiedad privada y social; el de la creación de órganos sociales que impidan el desmoronamiento de la opinión pública y delimiten su esfera de responsabilidad; el del bienestar y la seguridad; el de la ética de servicio.

La democracia es total en el sentido de que no puede existir a medias, ni como una suma de partes dispersas.

ANTONIO GARCIA.